

**INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN
EN SUBSIDIO FORMULA OPOSICIÓN A PRUEBA
APELA EN SUBSIDIO**

Señor Juez Federal:

Gastón Valtier, abogado inscripto en el T° 506 F° 70, en mi carácter de apoderado de “PORTA HNOS S.A.” en estos autos "**CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN s/ AMPARO AMBIENTAL**” (Expte. N° **21076/2016**), con el domicilio legal constituido en calle 9 de Julio N° 90, piso 2do de la ciudad de Córdoba y electrónico en 23-07679211-9, ante V.S. comparezco y digo:

I. OBJETO

1.1. Que en los términos del artículo 238 del Código Procesal Civil y Comercial, vengo a interponer recurso de reposición con apelación en subsidio, contra la providencia de fecha **29.12.2017**, en cuanto en la misma, V.S. invocando las facultades a las que se refiere el art. 32 de la Ley 25.675 dispone a) librar “*oficio al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente – Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en su carácter de especialista en la temática ambiental, a fin de que informe al Tribunal la factibilidad de realizar un estudio sobre posible contaminación ambiental en la planta PORTA HNOS S.A. “, y b) librar “oficio al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, a fin de que informe a este Tribunal la posibilidad de practicar una inspección sobre 100 personas, seleccionadas aleatoriamente, por edades y proximidad a la planta PORTA HNOS. S.A., para detectar posibles patologías respiratorias y/o dérmicas. En caso de respuesta afirmativa, indique al Tribunal requisitos, condiciones y costos para realizar la misma y cualquier otro dato o información que considere relevante a los fines que hubiere lugar.”*

Como seguidamente será explicado a lo largo del presente, lo ordenado por V.S. en los párrafos arriba transcritos implica un uso extralimitado y por lo tanto arbitrario de las facultades previstas en el art. 32 de la Ley 25.675, en tanto implican modificar el objeto de la demanda, y además importa

desconocer los efectos de una resolución judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada recaída en la otra causa judicial, al tiempo que viola el derecho de defensa de mi mandante y el principio de congruencia.

1.2. Ello así, y conforme se explica a continuación, corresponde y expresamente se solicita que V.S. revoque por contario imperio la providencia de fecha 29.12. 2017 en relación a los párrafos transcriptos.

1.3. Dejo asimismo interpuesto, para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la reposición intentada, el recurso de apelación en subsidio en los términos del art. 248 del Código Procesal.

1.4. En su defecto y a todo evento, mi representada, por las mismas razones formula expresa oposición a la producción de dicho medio probatorio, solicitando se declare la nulidad de dicho decreto, por violar las más elementales normas procesales (modificación del objeto de la demanda una vez trabada la litis), además de exceder la competencia de V.S. por la materia (daños por contaminación) y no respetar el debido proceso, en cuanto le ha dado al proceso de amparo un alcance que excede las previsiones de la Ley 16.986.

II. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1. Mediante la resolución que se recurre V.S. ha modificado el objeto de la demanda.

De la lectura del escrito de demanda surge con prístina e indudable claridad, que los actores iniciaron la presente acción como una acción de amparo ambiental afirmando que existiría una supuesta omisión de la Secretaría de Energía, consistente en la supuesta falta de habilitación de la planta de bioetanol de “Porta Hnos.” (aun cuando como se ha explicado no se encuentra alcanzada por la Ley 26.093).

Tanto es así que V.S. con fecha 27.04.2017, al rechazar la citación como tercero de la Municipalidad de Córdoba, resumió correctamente el objeto de la presente señalando que ...**“la demanda centraliza su reclamo en torno a determinar, las actividades que desarrolla la Planta de Bietanol de la Empresa Porta y su encuadramiento o no, de su actividad a las leyes vigentes en el orden**

nacional, Ley 26.093 de biocombustibles y la Ley 25.675 general del ambiente”.

En efecto, el objeto de la demanda se circunscribió a cuestionar la existencia o no de las “debidas habilitaciones”, y la actora ofreció una extensa prueba documental e informativa, pero no ofreció prueba pericial alguna.

Ahora bien, mediante la parte que se recurre de la Resolución del 29.12.2017, V.S. de oficio está modificando el objeto de la presente acción, reconduciendo el proceso a determinar la existencia o no “*de contaminación en la Planta de Porta Hnos*”, y a “*efectuar una inspección a 100 personas seleccionadas aleatoriamente, por edades y proximidad a la planta PORTA HNOS. S.A. para detectar posibles patologías respiratorias y/o dérmicas*”.

Es indudable que lo resuelto de oficio por V.S. apunta a investigar la supuesta existencia de contaminación y de daños o afecciones a la salud, y a asignar responsabilidades. Esto indudablemente implica una modificación por parte de V.S. del objeto de la pretensión contenida en el escrito de demanda –y que sirviera de base para que mi representada ejerciera su defensa-, **lo cual, adicionalmente, le está vedado no solo a las partes sino también a los magistrados; incluso en causas ambientales relacionadas.**

Así lo ha señalado claramente la CSJN al señalar:

... “7) *Que los jueces tienen amplias facultades en cuanto a la protección del ambiente y pueden ordenar el curso del proceso, e incluso darle trámite ordinario a un amparo*” (causa “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros, Fallos: 327:2967) o bien dividir las pretensiones a fin de lograr una efectiva y rápida satisfacción en materia de prevención (“Mendoza”, Fallos: 329:2316).

O también, al sentenciar que:

“El límite de estas facultades está dado por el respeto al debido proceso, porque los magistrados no pueden modificar el objeto de la pretensión examinando un tipo de acción como si se tratara de otro distinto. Ello es lo que ocurriría si en lugar de resolver sobre la falta de certeza se hiciera un análisis del riesgo ambiental y se dispusieran medidas excediendo totalmente el marco legal de la acción.” (CSJN A. 1032. XLII. RECURSO DE HECHO

"Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable c/ Comisión Nacional de Energía Atómica", Buenos Aires, 26 de mayo de 2010). Ello así, corresponde que V.S. por contrario imperio deje sin efecto la Resolución del 29.12.2017 en cuanto es materia del presente recurso.

2.2. La Resolución que se recurre desconoce resoluciones judiciales firmes con efectos de la cosa juzgada.

2.2.1. Adicionalmente a lo hasta aquí expuesto, corresponde agregar que las pericias ordenadas en la resolución recurrida y que son objeto del presente recurso, ya han sido practicadas en otra causa judicial, y como consecuencia de ello existe una resolución firme al respecto, pasada en autoridad de cosa juzgada.

En efecto, como se puso en conocimiento de V.S. al contestar demanda y mediante nuestra presentación de fs....., los mismos actores que han iniciado este amparo oportunamente promovieron una denuncia en sede penal que tramitó bajo los autos “Actuaciones labradas por la Unidad Judicial 4 en sumario 5682/13 (310664) con motivo formulada por Cruz Silvia Marcela y otros c/Porta Hermanos S.A.” (SACM N° 1747698), tramitados por ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno Tercer Turno, cuyas resoluciones fueron oportunamente ofrecidas como prueba por mi representada al contestar demanda en estas actuaciones.

2.2.2. En dicha causa penal se efectuó una pericia médica ambiental interdisciplinaria donde se concluyó en la inexistencia de contaminación atribuible a Porta Hnos.

Concretamente, en la resolución de la Fiscalía de fecha 3/3/2015 que resuelve archivar la denuncia se señala ...”*De este modo asumen decisiva importancia las razones proporcionadas por los peritos oficiales para fundar sus conclusiones. De las cuales se ha podido establecer que ninguna relación causal existe entre la instalación de la Fabrica Porta y la presencia de las sustancias que conforme la Ley 24.051 se reputan prohibidas cuando exceden el límite asignado.*”

“ *En definitiva ha quedado acreditado por medio de la pericia, la inexistencia de nexos causal, entre las afecciones y sintomatologías denunciadas por los*

querellantes y la actividad llevada a cabo en la planta de bioetanol de la empresa Porta Hermanos S.A....”

2.2.3. Esta decisión del Fiscal de Instrucción fue confirmada por el Fiscal de Cámara (14.01.2016), y por el Juez de Control (25.02.2016), por lo que el rechazo y archivo de la denuncia ha quedado firme.

Tanto es así, que en una denuncia posterior en autos “Denuncia Formulada por Jacob Iris Abigail, Carballo, José David y Median Marta Iris” (Expte. N° 3338945), el Fiscal de Instrucción resolvió desestimar la denuncia promovida por las citadas personas contra la empresa Porta Hnos S.A. explicando que “toda vez que si por medio de una resolución judicial firme, con peso de cosa juzgada, se ha descartado que la actividad productiva de la empresa Porta Hnos. S.A.A (en cualquiera de sus formas) sea configurativa de hechos de contaminación ambiental semejantes a los denunciados, es incorrecto establecer esa circunstancia inexistente como la conducta precedente que ha ocasionado un resultado posterior.”

2.2.4. Por lo aquí expuesto, la Resolución del 29.12.2017 de V.S. materia del presente recurso, además de su improcedencia procesal precedentemente analizada (modificar el objeto de la demanda), intenta volver a realizar pericias ya efectuadas en sede judicial, y que han dado lugar a resoluciones judiciales firmes.

En función de lo expuesto, lo resuelto por V.S. resulta violatorio del art. 1777 del Código Civil y Comercial de la Nación, y abre la posibilidad de sentencias contradictorias, motivo por el cual debe ser revocado tal como aquí se peticiona.

2.3. La Resolución que se recurre viola el derecho al debido proceso. Derecho de defensa y principio de congruencia.

2.3.1. Cabe destacar que precisamente teniendo en cuenta los términos de la demanda interpuesta por los actores, es que tanto la demandada - Secretaría de Energía de la Nación— como mi mandante, oportunamente efectuaron sus respectivos descargos y contestaciones de demanda, ofreciendo asimismo prueba en función de dicho reclamo.

En efecto, si la actora hubiera ofrecido una prueba pericial, mi mandante también podría haberse opuesto a su producción y/o pedir la limitación de la misma y/o haber ofrecido su propia prueba pericial y su consultor técnico, etc.

El hecho de que V.S. introduzca de oficio en ésta etapa procesal medidas probatorias –pericias- siquiera insinuadas en el escrito de inicio por la actora, viola todas las garantías procesales escritas en cualquier manual de derecho procesal, viola la igualdad de las partes en el proceso, como asimismo su derecho de defensa, el derecho al debido proceso y el principio de congruencia.

2.3.2. En este sentido tanto prestigiosos superiores tribunales de justicia provinciales como la propia CSJN, han destacado la importancia del derecho de defensa y el principio de congruencia, **y expresamente han aclarado que las facultades que el art. 32 de la Ley 25.675 asignan a los magistrados en ningún caso pueden ser ejercitadas a costa de sacrificar, mutilar y/o alterar tales garantías constitucionales.**

Así, el Superior de la Provincia del Neuquén resolvió:

...” Siendo ello así, la “redefinición” del pleito o el “nuevo planteamiento de la controversia”, en los términos propuestos, ampliando sus márgenes, tanto en la faz subjetiva como objetiva, va mucho más allá del permitido y siempre vigente principio “iura novit curia”, puesto que ese nuevo y rotundo abordaje de la cuestión no puede entenderse sino, como un viraje que coloca a las partes en un estado absoluto de indefensión (por no haber podido conocer ni alegar en torno al mismo)”

*“... Es que, al sobredimensionar las facultades propias de los jueces del modo expuesto, la actuación de aquellos se vuelve incongruente con el dibujo constitucional del debido proceso, pretextando actuar en defensa de un interés de linaje constitucional, como es la protección del medioambiente, pero, sin dudas, a costa de otro derecho no menos importante, y a mi entender de mayor jerarquía, cual es el de **defensa en juicio**” ... Del voto de la mayoría en la “Causa Lillo, S c/ Contreras y otros s/daños y perjuicios”, del 30.12.3003 (el énfasis y subrayado es nuestro).*

2.3.3. En idéntico sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas ambientales, resolvió:

... “el juez afirmó poner en ejercicio las facultades establecidas en el artículo 32 de la ley 25.675, ..., ordenó a YPF S.A. la contratación del seguro ambiental exigido por el artículo 22 de la ley 25.675 ...”. 3º) Que, en efecto, la decisión del tribunal de la causa en cuanto impone a la recurrente la obligación de contratar el seguro, debe ser descalificada como acto jurisdiccional constitucionalmente sostenible a la luz de la conocida jurisprudencia de esta Corte en materia de arbitrariedad, pues el juez a quo se expidió sobre una cuestión que no fue objeto del juicio, con menoscabo de las garantías constitucionales de defensa en juicio y de propiedad (Fallos: 325:1204; 219:1135; 320:2189; 321:2998; 330:1849). En autos, “YPF S.A. v. ACUMAR s/ medida cautelar autónoma” del 12.5.2015

2.3.4. Asimismo, en “AA. 1274. XXXIX. ORIGINARIO “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental”, del 29.8.2006, la CSJN resolvió:

“23) Que si bien no puede desconocerse que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador, y que un examen cerradamente literal de las normas rituales previstas para el clásico proceso adversarial de índole intersubjetivo sería frustratorio de los intereses superiores en juego, esos apropiados criterios hermenéuticos no pueden, por un lado, entronizarse en una fuente de naturaleza superior que autorice a privar al demandado de ejercer apropiadamente su garantía de defensa, y por su intermedio, el de tutelar derechos amparados por otras cláusulas constitucionales, tan merecedoras de protección como los invocados por la demandante. Y por el otro y con una trascendencia de pareja significación, que mediante el incumplimiento de reglas procesales que, como el principio de congruencia, están amalgamadas con el debido proceso, se impida al órgano judicial dictar un pronunciamiento fundado, expreso, positivo y preciso sobre todas y cada una de las cuestiones introducidas por la actora y de las defensas articuladas por el demandado, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo a las partes (arts. 34, inc. 4º, y 163, inc. 6º, del código de rito).” (El énfasis y el subrayado es nuestro).

2.3.5. Por todo lo aquí expuesto, la intervención oficiosa de V.S. tendiente a la producción de pruebas periciales no ofrecidas por las partes, resulta violatoria del derecho al debido proceso adjetivo y del principio de congruencia, colocando a mi mandante en una situación de indefensión.

III. OPOSICION DE ESTA PARTE. EL EXCESO DE COMPETENCIA Y LA ARBITRARIEDAD DE LA DECISION

3.1. Mi representada desde ya, y por si no hubiera quedado lo suficientemente claro, se opone a la realización de la pericia.

El claro fundamento es su nulidad, por cuanto ya ha sido producida en otro ámbito en el cual se encuentra en autoridad de cosa juzgada, y por cuanto, además, jamás pudo ser objeto de este proceso.

De allí su pedido de nulidad.

3.2. En efecto, conforme el objeto de la presente acción de amparo en los términos propuestos por los actores, y lo resuelto por V.S. con fecha 26.04.2017 en el marco de su competencia, la cuestión se debe centrar en determinar si la citada Porta Hnos. S.A., de conformidad con las actividades que realiza, debe contar o no con la habilitación previa del Ministerio de Energía de la Nación, de conformidad con las previsiones de la Ley N° 26.093 de Biocombustibles y Ley N° 25.675 General del Ambiente.

En tal oportunidad, textualmente V.S. ha resuelto: *“De manera que, por la presente no se discute el carácter contaminante de las actividades desarrolladas en la Planta de Bioetanol Porta Hnos. SA., muy por el contrario, lo que aquí se discute es sí, la Empresa tiene las habilitaciones nacionales para funcionar y si cumplió con el procedimiento previo de EIA”*.

3.3. Esa premisa fijada por V.S. en la resolución anterior, ha mutado sin razón alguna, en forma contradictoria con su propio razonamiento anterior y, agregamos, en forma arbitraria.

Contradictoria, por cuanto lo expuesto en la resolución del 26.04.2017 fijó el sentido de la acción, (i) en un todo de acuerdo con lo solicitado por las partes y (ii) en lo dispuesto por la Ley N° 16.986.

Arbitraria, por cuanto la decisión de V.S. tiene fundamento en su sola voluntad, apartándose de las normas procesales aplicables -al modificar el objeto del proceso-, como asimismo de los principios jurídicos que guían a la acción de amparo, desde que se trata de un proceso cautelar y restitutorio, tendente únicamente a la constatación de la violación o amenaza de violación del derecho o garantía constitucional, a objeto de que se le restablezca al solicitante el pleno goce y ejercicio de tales derechos sin prejuzgar sobre ninguna otra materia, quedando abiertas a las partes las vías ordinarias para reclamar las indemnizaciones o restituciones a que haya lugar en derecho.

3.4. Al modificar caprichosamente el contenido y sentido de la presente acción, introduciendo materias ajenas a la pretensión original de la actora, coloca a esta parte en un estado de completa indefensión, impropio de la conducta que debiera tener todo magistrado, que precisamente debería ser dar seguridad y garantía jurídica.

En efecto, cualquier medida probatoria que se ordenare con relación a este proceso –como en cualquier otro- debiera circunscribirse al objeto de la acción de amparo, evitándose la introducción de cuestiones que le son ajenas.

Tal situación ha generado en el ánimo de mi mandante como justiciable, un notable sentido de inseguridad y de perplejidad respecto a la continuidad de este proceso y de la eventual resolución final que recaiga.

3.5. Ya se ha dicho hasta el cansancio que mi representada –y entiendo que también la demandada- han contestado su demanda y ofrecido la prueba en base al objeto de la demanda original, generando las sucesivas alteraciones del proceso por parte de V.S., en un estado de indefensión.

Tan clara situación violatoria de las más mínimas garantía procesales y el carácter manifiesto de la nulidad, me eximen de fundar las defensas que esta parte se ha visto privada de oponer, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 172 del Código Procesal.

3.6. Adicionalmente, debido a su propio accionar, V.S. ha devenido incompetente para continuar conociendo en las presentes actuaciones.

En efecto, al haberse transgredido el sentido de la acción de amparo original, transformándose en un proceso de daños, V.S. ha devenido en incompetente para entender en la materia.

Va de suyo que no se discute que para ese tipo de procesos (en el caso, reclamo de daños ambientales), conforme la propia norma de competencia local y la inveterada jurisprudencia de la C.S.J.N., la justicia competente es la local y no la federal.

De allí que, claramente, en mérito a ello, por razones de incompetencia V.S. no puede continuar en el conocimiento de este proceso, debiendo excusarse y ordenar su pase a la justicia local.

IV. LA ELECCION DE UN ORGANISMO EN EXTRAÑA JURIDICCIÓN. POSIBLE RAZON.

4.1. Sin perjuicio de lo expuesto hasta el presente, una nueva cuestión aparece en la resolución impugnada que es de por sí sola llamativa: la elección de la Universidad de La Plata como órgano para realizar la pericia ambiental ordenada.

En efecto, en el decisorio en crisis, V.S. ha dispuesto librar un oficio al “*Centro de Investigaciones del Medio Ambiente – Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en su carácter de especialista en la temática ambiental, a fin de que informe al Tribunal la factibilidad de realizar un estudio sobre posible contaminación ambiental en la planta PORTA HNOS S.A., cuya actividad consiste en la fabricación de – elaboración de bebidas, alcohol, medicamentos, perfumes, cosméticos y domisanitarios, –planta de bioetanol anhidro a partir de maíz y sus productos, entre otras actividades*”

4.2. En otras palabras V.S. sin mayores fundamentos (...*en su carácter de especialista en la temática ambiental...*), decide designar a la Universidad Nacional de La Plata.

Como vemos, el fundamento es vago, infundado, poco claro y de una orfandad llamativa.

De donde surge el carácter de *especialista en la temática ambiental*, es realmente un enigma. V.S. tampoco lo explica.

4.3. Cabe preguntarse en primer término, cual es el motivo por el cual, existiendo dentro de la Provincia de Córdoba universidades de igual o mayor prestigio que la de La Plata (p.e. Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Córdoba y), V.S. ha dispuesto encomendar la labor a la de La Plata.

En tal sentido corresponde señalar que no existe en ningún medio especializado en temas ambientales una distinción honorífica, algún comentario y/o galardón, que le adjudique a la Universidad Nacional de La Plata un reconocimiento de tal naturaleza por encima de las restantes del país, incluyendo las situadas dentro de la Provincia de Córdoba.

4.4. Sin lugar a dudas, se trata de una decisión irrazonable y arbitraria, por cuanto:

- a) No se acredita que las universidades locales no sean idóneas para su producción.
- b) No se funda en razones objetivas, fácilmente demostrables y/o verificables.
- c) La afirmación del carácter de especialista surge de la sola voluntad de V.S.

4.5. Cabe preguntarse, previa demostración de que las universidades locales no pueden llevar adelante la tarea –lo que importaría subestimar su capacidad y ofender a todo el claustro de especialistas y profesores que trabajan en ella-, cuál es el motivo por el que se elige a la de La Plata y no a la de Buenos Aires, la de Corrientes, la de Salta o a cualquier otra, inclusive del extranjero.

Claramente, no hay respuesta.

Esta parte está casi segura que la Universidad de Buenos Aires, o la Universidad Nacional de Córdoba, o la Universidad Tecnológica Nacional (por

ejemplo), cuentan con mayor prestigio, galardones y menciones en materia ambiental que la Universidad de la Plata.

No cabe dudas entonces que el fundamento de selección dispuesto en la resolución recurrida viola las garantías constitucionales mínimas que emanan del art. 18 de la Constitución Nacional (debido proceso, derecho de defensa y tutela judicial efectiva), dado que el modo de selección genera serias y legítimas dudas sobre la imparcialidad y objetividad del organismo seleccionado.

4.6. Se suma a esta inconveniente y extraña decisión inconsulta y de dudoso fundamento, que de llevarse adelante la misma, generará más molestias que beneficios.

En primer lugar, un tema de distancia. En efecto, la locación de una Universidad elegida sin fundamento aparente, resulta inconveniente a la hora de contrastar la situación con las universidades locales, que están en los alrededores del tribunal y de las partes.

Ello importaría mayores costos –por el solo hecho de la lejanía. Piénsese solamente en el traslado de profesionales, equipamientos, muestras, etc.

4.7. Adicionalmente, importaría continuar alongando innecesariamente el proceso, dado que dichos traslados, verificaciones de estado de cosas, eventuales nuevas revisiones, etc., a la considerable distancia del lugar de los hechos, lo único que hará será entorpecer el curso del proceso.

Entonces, además del dispendio jurisdiccional innecesario que importaría mantener la decisión, es otra acabada muestra de la desnaturalización del amparo, y afectación del derecho de mi representada de obtener decisión judicial en un plazo razonable.

4.8. V.S., ésta vez sin ensayar fundamentación alguna, decide librar oficio al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas también de la Universidad Nacional de La Plata, a fin de que informe sobre la posibilidad de realizar una inspección sobre 100 personas seleccionadas aleatoriamente, para detectar posibles patologías respiratorias y/o dérmicas. Debe entenderse que todos los reproches que fueran realizados anteriormente en relación a la pericia

ambiental, resultan extensivos a ésta particular inspección que pretende V.S. también realice una universidad de extraña jurisdicción.

4.9. Posible fundamento:

4.9.1. Mi representada ha intentado averiguar qué pudo llevar a V.S. a ordenar dicha decisión.

Pues bien, habiendo realizado las investigaciones del caso, esta parte ha podido entender la designación de dicha universidad.

El único motivo que puede haber llevado a V.S. a designar dicho claustro universitario, es la aceptada y fluida relación del Dr. Darío Ávila Vazquez, quien fuera letrado de los actores en distintos reclamos administrativos, con la referida universidad, a través de su hermano el Dr. Medardo Ávila Vazques, quien a su vez es médico consultor de los amparistas y ha sido ofrecido como testigo por esa parte.

4.9.2. En efecto, el **Dr. Medardo Ávila –hermano de uno de los letrados de los actores-** ha trabajado en equipos de investigación interdisciplinarios en los cuales todos los peritajes los termina analizando el laboratorio de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.

Dicha vinculación surge de los siguientes enlaces que pueden consultarse libremente desde cualquier medio informático, consistentes en una serie artículos publicados en diversos medios –incluyendo la propia universidad-, que seguidamente se detallan.

4.9.3. Por ejemplo, en el artículo del año 2015 publicado por la UNLP rotulado “*Encuentran glifosato en algodón, gasas, hisopos, toallitas y tampones*”(http://www.exactas.unlp.edu.ar/articulo/2015/10/21/encuentran_glifosato_en_algodon__gasas__hisopos__toallitas_y_tampones), puede leerse en el mismo que *"El 85 por ciento de todas las muestras dieron positivos para glifosato y el 62 por ciento para AMPA, que es el metabolito ambiental; pero en el caso de algodones y gasas el porcentaje fue del cien por ciento"*, detalló a Télam el doctor en Química Damian Marino, integrante de EMISA.I (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP). (...) *"El resultado de esta investigación es muy grave.*

*Cuando uno utiliza algodón o gasas para curar heridas o para uso personal higiénico, lo hace pensando que son productos esterilizados, y resulta que están contaminados con una sustancia cancerígena", afirmó por su parte el pediatra **Medardo Ávila Vázquez**, referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados."*

En otro artículo del año 2016 publicado por Crítica y Resistencias titulado *"Agricultura tóxica y salud en pueblos fumigados de Argentina"* (<http://criticayresistencias.comunis.com.ar/index.php/CriticaResistencias/article/view/33>), puede apreciarse lo siguiente: *"Esta situación queda claramente demostrada en el Estudio de la Salud Socio-Ambiental de Monte Maíz en octubre de 2014 por un equipo interdisciplinario de médicos y geógrafos de la Universidad Nacional de Córdoba y químicos de la Universidad Nacional de la Plata. Este modelo de agricultura tóxica tiene impacto sobre la naturaleza, de la cual las poblaciones humanas somos parte."*

Otro artículo publicado en el año 2015 titulado *"La población está cada vez más expuesta a los agrotóxicos"*, consistente en una entrevista a **Medardo Ávila Vázquez** (<http://www.andaragencia.org/la-poblacion-esta-cada-vez-mas-expuesta-a-los-agrotoxicos/>), puede allí leerse lo siguiente: *"Se pueden hacer pruebas de orina porque se elimina más rápidamente. Cuando vos estás expuesto a glifosato en dos días prácticamente eliminás todo el glifosato que paso por tu cuerpo. En Argentina hay un primer laboratorio que está haciendo estas mediciones en sangre y en orina, que es el laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y no hay muchos laboratorios que lo hagan."*

De una nota de Periodismo Popular del año 2015 publicada bajo *"Salud, ambiente y agronegocio: El caso de Monte Maíz"* (<https://notasperiodismopopular.com.ar/2015/04/24/salud-ambiente-agronegocio-caso-monte-maiz/>), puede extraerse lo siguiente:

"Medardo comentó que estudiaron la contaminación en suelo, el manejo del agua y en la actividad agraria, que es la principal de la zona. Junto al Centro de Investigación de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata realizaron mediciones de agroquímicos y arsénico en agua, suelo y aire. El trabajo se basó en un relevamiento casa por casa, a través de una encuesta. Según el investigador, "el protocolo que empleamos es muy simple y viene empleándose hace más de 20 años en estudios epidemiológicos"

Otro artículo publicado en el año 2015 en el matutino Página 12, bajo el título de *“Sociedad › Polémica sobre un investigador que estudio los transgenicos y agroquimicos - Debate por un estudio ambiental”* (<https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-271898-2015-05-04.html>), se transcribe lo siguiente: *"El decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Juan Marcelo Conrero, tomó una medida con pocos antecedentes: solicitó un sumario administrativo y sanción para un docente e investigador de la Facultad de Medicina, Medardo Avila Vazquez. El pedido obedece a que **Avila Vazquez** coordinó un relevamiento sanitario en la localidad de Monte Maíz, donde confirmó altos índices de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. Y vinculó las enfermedades a transgénicos y agroquímicos. “Es una clara persecución ideológica. Si el estudio hubiese sido favorable a Monsanto no hubieran dicho nada, incluso lo celebrarían”, afirmó el investigador denunciado. Los vecinos de Monte Maíz, la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata (que también participó del relevamiento sanitario) e investigadores de doce países respaldaron al docente y médico cordobés.”.*

4.9.4. De lo expuesto, surge con palmaria claridad que la única razón por la cual V.S. pudo haber designado a la Universidad de La Plata es por la **cercana relación entre profesionales vinculados con la parte actora**, quienes son las únicas personas que pudieron sugerir la designación de dicha universidad, **en razón de los aceitados vínculos del Dr. Ávila Vázquez con el referido centro de altos estudios.**

De lo contrario, ¿cómo hubiera podido ocurrírsele a V.S. la designación de ese claustro universitario?

No puede existir otra razón posible.

4.9.5. Va de suyo además, que tal situación comporta que V.S. ha incurrido en las causales de recusación con causa previstos en el art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en especial incisos 9 y 10), respecto de lo cual se hace la más absoluta de las reservas de interponer el correspondiente incidente, dentro del plazo de ley.

4.10. En función de lo expuesto, deberá V.S. dejar sin efecto, como mínimo, la designación de la Universidad Nacional de la Plata como ente encargado de realizar la pericia.

Ello sin perjuicio de resolver asimismo la oposición de mi representada que se produzca una pericia que ya ha sido producida en sede judicial.

V. APELACIÓN SUBSIDIARIA

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la reposición intentada, dejo planteado, subsidiariamente y en los términos del art. 248 del Código Procesal, el recurso de apelación contra dicho pronunciamiento.

VI. PETITORIO

Por tanto, a V.S. solicito:

6.1. Que tenga por interpuesto en legal tiempo y forma el recurso de reposición contra la resolución del 29 de diciembre de 2017.

6.2. En función de lo expuesto, revoque la referida resolución de fecha 29 de diciembre de 2017 en cuanto es materia del presente recurso.

6.3. En subsidio, tenga presente el recurso de apelación interpuesto y, en su caso, lo conceda.

6.4. Tenga presente la oposición y nulidad deducida.

6.5. Tenga presente la reserva de recusar con causa a V.S. en el plazo fijado por la norma al efecto.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA